

Infopower, enero 2003
MANUEL DE DELAS
Secretario General
Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA

2002, un año de incertidumbres

No, no será recordado como un buen año para las energías renovables este 2002 que nos ha dejado pese a que la potencia instalada en nuestro país creció en cerca de mil cuatrocientos megavatios. No podemos desde la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA hacer un balance positivo porque en estos doce meses han aparecido más nubarrones todavía en el futuro del sector y no se han cumplido nuestros deseos, por ejemplo, de ver despegar a la biomasa o plasmarse en medidas concretas la deseada decisión política de aligerar la tramitación de nuestros proyectos.

El año, bien al contrario, se ha caracterizado por una intensificación de la descalificación de las renovables como pilar esencial de futuro de nuestro sector energético. Desde numerosas tribunas se han podido escuchar ataques al sistema de apoyo al precio, voces que magnificaban los problemas técnicos que causa la eólica en la red, posicionamientos políticos distintos de un mismo partido ante las nuevas instalaciones según le corresponda gobernar o estar en la oposición municipal, la propagación de la idea de que "esto de la eólica es un chollo", y un largo y penoso etcétera.

El falaz argumento de que las renovables son caras se ha repetido una y otra vez y en muchos casos para llegar a la conclusión de que habrá que volver la vista a viejas recetas. Es sorprendente que todavía hoy, y a la vista de los innumerable estudios que demuestran la realidad del cambio climático, no sirva exclusivamente este argumento para dejar bien claro que lo caro es el empleo de las tecnologías convencionales: caro para nuestro medio ambiente, caro para nuestra economía nacional, nefasto para nuestra balanza comercial y muy peligroso para nuestra independencia estratégica. Caros será el precio que alcanzará el petróleo con la próxima y anunciada guerra contra Irak. ¿O acaso eso no son costes de nuestra energía? Pero estos costes se silencian y no se achacan a la existencia de un modelo energético obsoleto que pide a gritos un cambio. Si cualquiera de estos costes de las fuentes convencionales se internalizasen en el precio del kWh superarían con creces el importe de los incentivos de las renovables. La suma de los mismos durante el 2002 ha alcanzado los trescientos cincuenta millones de euros, una cifra irrisoria frente al coste que suponen los daños al medio ambiente o las subvenciones directas o indirectas que reciben el resto de las fuentes de energía, vía apoyo al carbón, infraestructuras gasísticas o petrolíferas, etcétera.

El evitar la emisión de cerca de 15 millones de toneladas de CO₂, como lo han hecho a lo largo del pasado año las renovables en España -cada vez que se pone en marcha un parque eólico o entra en funcionamiento una minicentral deja de funcionar una térmica-, es ahorro para nuestra sociedad, un ahorro para hoy y un ahorro para mañana cuando el incumplimiento de los compromisos adquiridos en Kioto y ratificados por nuestro país acarree duras sanciones económicas.

La ausencia de la biomasa

El gran ausente del sector renovable español es la biomasa, lo cual es muy grave si tenemos en cuenta que tiene un peso importante en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables. La causa es bien sencilla: la ausencia de rentabilidad de las plantas de producción de electricidad por los precios a los que actualmente se retribuyen los kilovatios/hora generados por esta tecnología. Tres años después de la aprobación del Plan de Fomento aún no se ha cumplido ni la sexta parte de los objetivos marcados por este Gobierno, que en las tarifas para el 2003 ha aumentado la retribución de esta tecnología pero creemos que de manera insuficiente.

España no tendrá en el 2010 un 12% de energía limpia respecto al consumo de energía primaria, como marca nuestra legislación, ni tampoco un 29,4% respecto a la producción de electricidad marcada por la Directiva Europea sino se toman las medidas oportunas. Pero en 2002 tampoco se han dado los pasos necesarios para ver cumplidas algunas reivindicaciones de APPA como la aceleración y simplificación de los trámites administrativos, que suponen una barrera para que se produzca un despegue total de las renovables a consecuencia de la ralentización y la demora en la concesión de permisos y los innumerable trámites y papeleos. En el aspecto positivo cabe señalar que la eólica mantiene de momento su vigor pese a que se multiplican los obstáculos en el camino de su desarrollo. Cerca de mil cuatrocientos megavatios más se han instalado en nuestro país consolidando el segundo puesto en el ranking europeo en la utilización de esta tecnología, eso si, muy por detrás el Alemania, que se sitúa como líder indiscutible en la producción eólica. Aún así, queremos insistir en la idea de que esta tecnología no es la panacea. Es posible que en determinadas instalaciones, que en su día pudieron elegir mejores emplazamientos, tengan una buena rentabilidad, pero en su momento fueron las más arriesgadas por el desconocimiento de la evolución del sector. Lo que queda claro es que la mayor parte de lo que se está instalando y, sobre todo, lo que debe instalarse todavía tendrá en su caso rentabilidades muy moderadas y tendrá que superar muchos obstáculos para hacerse realidad.

La fotovoltaica, por su parte, ha experimentado también durante el año pasado una notable proyección a futuro, en su mayor parte propiciada por ayuntamientos y organismos locales, que han apostado firmemente por el desarrollo de esta fuente de energía, implantado normativas para la instalación de placas solares en edificios municipales o en otros casos obligando a dotar de preinstalaciones a los edificios de nueva construcción. Este tipo de iniciativas son realmente importantes para conseguir que se produzca un uso racional de la energía.

APPA reivindica la vigencia de las razones que llevaron al Parlamento en su día a aprobar unos incentivos, en forma de prima, para las renovables, reclamando una muestra de confianza más que unos incentivos económicos. En tanto en cuanto no se produzca una internalización de los costes ambientales de las energías renovables, tendremos derecho a los incentivos, a las compensaciones que la ley nos otorga por los beneficios producidos por la generación de nuestra actividad. La nueva metodología de costes y tarifas que actualmente prepara el Ejecutivo, y que saldrá a la luz el próximo mes de enero, puede devolver la confianza al sector. Así lo esperamos.